

Es copia que certifico, para su publicacion en el Semanario Judicial de la Federacion. Mérida, Diciembre 5 de 1873.—*José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 19 de 1874. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatán por Felipe Vargas contra el Juez 1º del ramo criminal de Mérida, que lo retiene en prision sin haber precedido mandamiento escrito fundando la causa legal de ese procedimiento, con violacion de la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitución federal; y considerando: que según aparece de las constancias de autos, el Juez 1º del ramo criminal que conforme á las leyes del Estado es competente para conocer de los delitos comunes y de los de rebelion contra las autoridades del mismo Estado, dictó por escrito la orden en virtud de la cual fué reducido á prision el quejoso, dando por fundamento de ella estar acusado de los delitos de rebelion y robo á mano armada.

Por cuyo motivo, no habiendo existido violacion alguna de la garantía constitucional invocada, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 12 de Noviembre del año próximo pasado y se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Felipe Vargas, contra el Juez 1º de lo criminal de Mérida que lo redujo á prision para juzgarlo por delitos de rebelion contra las autoridades locales y robo á mano armada.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Supre-

ma de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. —*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan S. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Castañeda Nájera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José G. Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 25 de 1874.—*Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por D^a Amada Ponce de Saenz, representada por D. Nabor Hernandez, contra el Juez de 1ª instancia de la capital del mismo Estado, por violacion de las garantías consignadas en los arts. 20 y 27 de la Constitución federal, é infraccion del art. 1º de la misma y el 6º de la ley de 30 de Diciembre de 1867.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

D^a Amada Ponce de Saenz pide el amparo de la Justicia federal, contra los procedimientos del Juez de 1ª instancia de ese partido y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en un negocio judicial en que le sobraban recursos ordinarios de que no ha querido hacer uso, tal vez para pretender que V. contravenga á la prohibicion expresa del art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, que dice: "No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales," y viole manifiestamente el art. 14 de la Constitución de la República, sin designar la solicitante siquiera, cual es la garantía individual que considera violada en su persona.

Por tales fundamentos, esta Promotoria tiene por improcedente el recurso, y pide á V. se sirva denegar el amparo.

San Juan Bautista, 24 de Octubre de 1873.—*Lic. Cordera.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Diciembre 5 de 1873.—*Gabriel Sosa*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Juan Bautista, Diciembre 2 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por D^a Amada Ponce de Saenz, representada por el C. Nabor Hernandez, alegando que el C. Juez de 1^a instancia de esta Capital, ha violado la garantía otorgada en el art. 27 de la Constitución general, é infringido el art. 1^o de la misma y el 6 de la ley de 30 de Diciembre de 1867, al declarar concursados los bienes del finado D. Narciso Saenz. Vistas las pruebas producidas, el pedimento fiscal y lo alegado por la parte promovente.

Considerando: que al hacer la declaración del concurso á petición del competente numero de acreedores, procedió el C. Juez de 1^a instancia con arreglo á sus facultades, segun se vé en la Cúria Filípica Mexicana, Part. 2 seccion 3, núm. 31 sin que por esto haya infringido el artículo 6 de la ley citada de 30 de Noviembre de 1869, pues si decretó la seguridad de los bienes, fué en virtud de la declaración del concurso y no por razon del intestado; que con esta no se viola la garantía del artículo 27 en el cual se prohíbe la ocupacion arbitraria de la propiedad particular, asi como no se falta á ella con los embargos y ejecuciones, que con arreglo á las leyes y en consecuencia de los contratos de las partes, decretan los Jueces para compeler á estas al cumplimiento de sus obligaciones, por que si bien no aparece el consentimiento expreso del dueño de la propiedad, en esos casos se presume que la hay por la regla: "El que quiere lo que antecede, debe querer lo que se sigue," y que mucho menos puede entenderse que se ha violado la garantía del art.

20 fracciones 4^a y 5^a, porque en el concurso formado á los bienes del finado Saenz, no aparece que se haya seguido ninguna incidencia criminal, para que pudiese violarse esa garantía, que solo puede tener lugar en los asuntos de esa clase. En atencion á estos fundamentos legales, y de conformidad con los arts. 101 y 102 de la Constitución general de la Nacion, y con la ley suprema de 20 de Enero de 1869, este Juzgado falla:

Primero: La Justicia federal no ampara ni protege á la Señora D^a Amada Ponce de Saenz, contra el procedimiento del C. Juez de 1^a instancia de esta Ciudad, en que con fecha 20 de Agosto último, declaró concursados los bienes que quedaron por muerte de D. Narciso Saenz, con el que no se viola la garantía del art. 20, ni la del art. 27 de la Constitución, ni se infringe el art. 6 de la citada ley de 30 de Noviembre de 1869.

Segundo. Notifiquese este fallo, y sacadas las copias prevenidas por la ley para su publicacion, remítase este juicio á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El C. Lic. Santiago Cruces, Juez 1^o suplente funcionario de Distrito del Estado, así lo proveyó, mandó y firmó, por ante mí su Escribano que doy fé.—*Lic. Santiago Cruces.*—Ante mí.—*Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Diciembre 5 de 1873.—*Gabriel Sosa*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 19 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por D^a Amada Ponce de Saenz, representada por D. Nabor Hernandez, ante el Juzgado de Distrito de Tabasco, por violacion de las garantías consignadas en los arts. 20 y 27 de la Constitución federal, é infraccion del art. 1^o de de la misma y el 6^o de la ley de 30 de Diciembre de 1867, de todo lo cual hace res-

ponsable al C. Juez de 1ª instancia de la Capital de dicho Estado por haber declarado concursados los bienes del difunto esposo de la promovente, D. Narciso Saenz. Vistas las pruebas aducidas; el informe de la autoridad responsable; lo alegado por la solicitante; el parecer fiscal y el fallo del Juez de Distrito:

Considerando: que el Juez de 1ª instancia de la Ciudad de San Juan Bautista, de Tabasco, ha procedido en todo en la órbita legal de sus facultades y que en manera alguna se oponen á la Constitución federal; por lo cual, en ningún caso puede decirse que en la secuela del juicio de concurso á bienes á que legítimamente ha conocido, haya la violación de garantías que indica la solicitante, se declara: que se confirma la sentencia del inferior que negó el amparo á la Sra. Dª Amada Ponce de Saenz representada por el C. Nabor Hernandez.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landá,* secretario.

Es copia que certifico. México, 12 de Febrero de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos por la Sra. Dª Petra Escobar, contra la Gefatura política de Cuernavaca, por violación de la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución general de la República.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que Doña Petra Escobar presentó escrito á este Juzgado, diciéndole: que posee hace mas de nueve años unos terrenos de repartimiento en el pueblo de Tlaltenango, y teniendo noticia de que Eugenio Hernandez los habia pedido en adjudicación, ocurrió á la Gefatura política oponiéndose á tal pretension, pues conforme á la circular de 9 de Octubre de 1856 y al decreto del Estado de México de 20 de Octubre de 1868, la adjudicación de esos terrenos debe hacerse precisamente á sus poseedores; pero que contraviniendo esas prevenciones, el C. Gefe político ha mandado extender el título de adjudicación en favor de Hernandez, y como ese procedimiento viola en su persona la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución, lo reclama iniciando el recurso de amparo, y pide que suspendiéndose desde luego el acto reclamado, para evitar que Hernandez quite los terrenos y arroje de su casa á la quejosa, se le ampare en el goce de la garantía citada.

Con arreglo al artículo 59 de la ley de 20 de Enero de 1869, se suspendió desde luego la expedición del título de adjudicación á favor de Eugenio Hernandez; y en los términos y forma de la misma ley informó la Gefatura política, diciendo: que en 14 de Octubre último, Doña Petra Escobar solicitó la adjudicación de los terrenos que menciona, y en 26 del mismo, Eugenio Hernandez, hijo de aquella Señora, pidió á su